



Imprimir artículo Exportar a PDF
Volver

Las venas abiertas de la minería en Perú



Por Eric Llopis

Contrainformación, 10 de enero, 2019.- “Mata a la que está con waraqa (honda), mata a esa chola de mierda, dale, dale”. Ésta fue la orden del oficial a un agente de policía para que asesinara –en junio de 2011– a la activista Petronila Coa Huanca en el aeropuerto de la ciudad de Juliaca (región de Puno). Murieron otras cinco personas y decenas resultaron heridas por los disparos de policías y soldados. Alan García, del Partido Aprista, desempeñaba la Presidencia de Perú. Petronila Coa Huanca participaba en las protestas contra los proyectos mineros en la región de Puno, por ejemplo, el de Santa Marta, de extracción de plata, desarrollado por la canadiense Bear Creek; también reivindicaban la descontaminación de la cuenca del río Ramis, afluente del lago Titicaca.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señala que entre 2011 y 2018 han sido asesinadas 119 personas defensoras de los derechos humanos en Perú y más de 800 eran objeto de criminalización durante 2017 (“líderes comunitarios, indígenas y ronderos son particularmente afectados mediante la aplicación de tipos penales como la extorsión y el secuestro”, según el Observatorio para la Protección de los Defensores); en 2017 fueron asesinados ocho defensores de la tierra y el medio ambiente en Perú, informa la ONG Global Witness.

Además, la Campaña “Defensoras no están solas” denuncia el procesamiento de 102 mujeres por participar en diferentes formas de protesta social. La Defensoría del Pueblo, que hace un seguimiento de los conflictos sociales en el país, informó en octubre de 2018 de 199 conflictos (142 activos y 57 latentes), de los que el 61,8% fueron de carácter socioambiental y se registraron principalmente en los departamentos de Áncash, Puno y Cusco.

“Minería para el progreso”. Así define el consorcio encabezado por la compañía australiana MMG Limited su actividad en la mina de cobre Las Bambas, de la que es propietaria desde 2014 en el departamento de Apurímac (los titulares anteriores fueron la minera anglo-suiza Xstrata y la multinacional Glencore, con sede en Suiza). El accionista principal de MMG Limited es China



Minmetals Corporation. “Se espera que Las Bambas produzca más de dos millones de toneladas de cobre en concentrado durante sus primeros cinco años de operación”, afirmó en octubre el director ejecutivo de MMG Limited, Geoffrey Gao. Aunque hay también otra realidad en el caso de Las Bambas. Con Ollanta Umala en la presidencia, en septiembre de 2015, la represión policial de las protestas se saldó con cuatro manifestantes muertos y la declaración del Estado de Emergencia en seis provincias. En agosto de 2018 se decretó asimismo el Estado de Emergencia en 482 kilómetros del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa (“corredor minero del sur”), para que la policía mantuviera el “control del orden interno” con el apoyo del ejército; de este modo se hacía frente a las movilizaciones y bloqueo de carreteras por parte de las comunidades.

“¡El agro, la pesca y la minería juntos por el desarrollo de Islay!” Southern Cooper en Perú –subsidiaria del gigante del cobre Grupo México– anuncia de este modo el proyecto minero “Tía María” en la provincia de Islay (Arequipa), cuyas tareas de exploración comenzaron en 1994. Actualmente Southern Perú está a la espera de obtener el permiso de construcción que otorga el Ministerio de Energía y Minas, con la particularidad de que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 expira en agosto de 2019; la previsión de la empresa es producir 120.000 toneladas de cobre anuales en “Tía María”.

La iniciativa de Southern Perú tiene ya una larga historia. En abril de 2011 cuatro personas murieron y un centenar resultaron heridas por la represión policial de las protestas en el Valle del Tambo; otros dos opositores al proyecto “Tía María” y un policía muertos es el balance del paro indefinido y las movilizaciones de 2015, en las que se reclamaba por las posibles consecuencias de la actividad minera, como la contaminación del río Tambo, de las aguas subterráneas, el impacto en la agricultura o las enfermedades pulmonares. En cuanto a la criminalización de las acciones, en enero de 2018 la Fiscalía de Arequipa acusó de pertenencia a organización ilícita para delinquir a activistas que participaron en las luchas de 2015. Mientras, pobladores del Valle del Tambo continúan movilizándose con la consigna “Agro sí, mina no” y por ejemplo en marzo de 2018, se celebró en Cocachacra (Islay) el Encuentro Nacional “Valle de Tambo, resistencia y lucha por la vida”.

Pero “Tía María” no es la única actuación de Grupo México en Perú. La agencia pública ProInversión le adjudicó el 20 de febrero los yacimientos cupríferos de Michiquillay, en el departamento de Cajamarca (1.100 millones de toneladas de mineral); también desarrolla la iniciativa Los Chancas (Apurímac), en fase de evaluación ambiental, y la ampliación de la mina y la concentradora Toquepala, en la región de Tacna, para aumentar la producción de cobre.

Otro de los múltiples frentes abiertos es el proyecto Tintaya Antapaccay, que desarrolla desde 2013 la transnacional Glencore en la provincia de Espinar (Cusco). En diciembre de 2018 las excavadoras de la empresa irrumpieron de manera violenta en la comunidad de Alto Huarca (Espinar), lo que causó destrozos y heridos (en abril se produjeron episodios parecidos durante la resistencia a los desalojos). Un punto de intensidad en la protesta se registró en mayo de 2012, cuando la empresa Xstrata era titular de la mina: cuatro comuneros muertos, otros heridos de bala y la declaración del estado de emergencia durante una huelga indefinida; entre las reivindicaciones figuraban los impactos ambientales –sobre los ríos Salado y Cañipía, la muerte de animales o la presencia de mercurio y plomo en la sangre y orina de los vecinos–, así como el incumplimiento de los convenios entre la empresa y las comunidades.

Podrían agregarse numerosos casos de extractivismo, resistencia y acción represiva. Una de las referencias centrales es el proyecto Conga, que promueve la empresa Yanacocha y está oficialmente suspendido desde noviembre de 2011; integran esta sociedad la estadounidense Newton Mining, la peruana Minas Buenaventura y en menor proporción la japonesa Sumitomo, que adquirió en diciembre de 2017 la participación de Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. Anunciada como “la mina de oro más grande de Sudamérica”, el proyecto se sitúa en las provincias de Cajamarca y Celendín, entre 3.500 y 4.100 metros sobre el nivel del mar. A pesar de la suspensión, el pasado 23 de abril el periódico La República reprodujo estas declaraciones de Carlos Sánchez Terrones, representante de las rondas campesinas de Cajamarca: “Personas que están plenamente identificadas como trabajadores mineros llegan a las comunidades con regalos a concientizar a la gente para que consigan la licencia social del megaproyecto Conga”; “recordamos que el año 2012 dejó cinco muertos y centenares de heridos como consecuencia de la represión policial”, añadió el dirigente.



La base de datos sobre criminalización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó, en relación con el proyecto Conga, la cifra de 42 personas procesadas por hechos ocurridos entre junio de 2012 y agosto de 2013; en total, 63 presuntos delitos. Las organizaciones populares alertaban, además, en movilizaciones y comunicados, de los impactos de esta macroiniciativa; por ejemplo, “secar cuatro lagunas, cinco ríos, unos 600 ‘ojos de agua’, además de levantar humedales y bofedales, lo que afectaría a las condiciones de vida de miles de familias”.

¿Qué relevancia tiene la actividad minera en la economía peruana? ¿Es la otra cara de las luchas populares? Al cierre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas contabilizó 48 proyectos de construcción de minas para los próximos años, que representan cerca de 60.000 millones de dólares en inversiones de 11 países, principalmente firmas de Gran Bretaña, China, México, Canadá y Estados Unidos. Además el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 del Ministerio de Economía, aprobado en agosto, apuntaba incrementos de la inversión minera del 19% en 2018 y el 23% en 2019, “las tasas más altas de crecimiento desde 2011”; de hecho, “se consolida el inicio de un nuevo ciclo de inversiones”, debido a proyectos cupríferos como Quellaveco, que desarrolla Anglo American Perú en el departamento de Moquegua; Mina Justa, en Ica, cuyo operador es la peruana Marcobre SAC; o la ampliación de la mina Toromocho, en Junín, a cargo de la filial peruana de la estatal Chinalco.

El Marco Macroeconómico Multianual señala asimismo que las compañías están en “una mejor posición financiera”; así, “la recuperación del precio de los metales y las políticas de reducción de costos ha incrementado la rentabilidad y reducido su endeudamiento”. Por otra parte, las exportaciones mineras de Perú sumaron 21.351 millones de dólares entre enero y septiembre de 2018, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2017, según las estadísticas de la patronal SNMPE.

Fuente: Publicado el 9 de enero por **Contrainformación:** <https://contrainformacion.es/las-venas-abiertas-de-la-mineria-en-peru/> [1]

Tags relacionados: [Derechos Humanos](#) [2]
[Minas Buenaventura](#) [3]
[Marco Macroeconómico Multianual](#) [4]
[Corporación Financiera Internacional](#) [5]
[mmg limited](#) [6]
[Southern Cooper](#) [7]
[proyecto conga](#) [8]
[ONG Global Witness](#) [9]
[defensoria del pueblo](#) [10]
[Defensoras no están solas](#) [11]
[coordinadora nacional de derechos humanos](#) [12]
[Observatorio para la Protección de los Defensores](#) [13]

Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: <https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/01/2019/las-venas-abiertas-de-la-mineria-en-peru>

Links

[1] <https://contrainformacion.es/las-venas-abiertas-de-la-mineria-en-peru/>
[2] <https://www.servindi.org/etiqueta/derechos-humanos>
[3] <https://www.servindi.org/tags/minas-buenaventura>
[4] <https://www.servindi.org/tags/marco-macroeconomico-multianual>



- [5] <https://www.servindi.org/etiqueta/corporaci%C3%B3n-financiera-internacional>
- [6] <https://www.servindi.org/etiqueta/mmg-limited>
- [7] <https://www.servindi.org/etiqueta/southern-cooper>
- [8] <https://www.servindi.org/etiqueta/proyecto-conga>
- [9] <https://www.servindi.org/tags/ong-global-witness>
- [10] <https://www.servindi.org/etiqueta/defensoria-del-pueblo>
- [11] <https://www.servindi.org/tags/defensoras-no-estan-solas>
- [12] <https://www.servindi.org/etiqueta/coordinadora-nacional-de-derechos-humanos>
- [13] <https://www.servindi.org/tags/observatorio-para-la-proteccion-de-los-defensores>